

CAPÍTULO III.

DE LA COMPETENCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL.

ARTÍCULO 347.

1. El Supremo Tribunal de Justicia conocerá de todos los negocios y recursos que el Código de Procedimientos penales y demás leyes vigentes le demarcan.

TÍTULO SEGUNDO.

PROCEDIMIENTOS DE LOS JUECES
DEL RAMO PENAL.

CAPÍTULO I.

PROCEDIMIENTO ANTE LOS ALCALDES
Y COMISARIOS.

ARTÍCULOS DEL 348 AL 361.

1. Los alcaldes y comisarios en los negocios de su resorte, dictarán primeramente el auto cabeza de proceso, mandando practicar las diligencias conducentes á la comprobación del cuerpo del delito, y procederán al mismo tiempo, á dictar las medidas convenientes para el aseguramiento ó aprehensión del que aparezca delincuente.
2. En seguida tomarán al detenido su inquisitiva y le nombrarán defensor, dándole á saber la causa de su detención. Si de lo practicado resultaren méritos para dictar el auto motivado de prisión, se pronunciará éste, ó de lo contrario, el de libertad; pero si aún estuviere corriendo el término constitucional y hubiere sospechas racionales de culpabilidad, continuará la detención, hasta que se practiquen algunas diligencias que exclarezcan la verdad, y cumplidos los tres días, se dictará el auto de soltura ó de prisión.
3. El auto de soltura será revisado, lo más pronto po-

sible, por el juez de letras del partido, quien si no lo confirmare, mandará al juez constitucional, que reduzca luego á prisión al sospechoso y prosiga la averiguación. Si se interpusiere apelación del auto de prisión, el recurso se sustanciará según las disposiciones respectivas. Pronunciado el auto de prisión, se practicarán las demás diligencias instructivas del proceso que fueren conducentes y por el orden que el caso requiera. En estos juicios, los incidentes que se presenten se resolverán de plano, excepto el de libertad provisional ó bajo caución, en que se observarán los trámites que previene el capítulo que trata de ellos.

4. La instrucción debe concluirse ántes de quince días, si el delito es de la competencia de un comisario, y ántes de un mes, si fuere de la competencia de un alcalde. Concluidos la instrucción ó los plazos dichos, se remitirá al juez de primera instancia del partido, tomándose antes razón de los puntos principales que contenga, en un libro que se llevará al efecto.

5. El juez letrado á las veinticuatro horas de recibido el proceso, lo mandará pasar al agente respectivo, para que dentro de tres días formule sus conclusiones que pueden ser: 1.º Que no hay lugar á acusación: 2.º Que hay lugar por delito que no sea de la competencia del juez instructor del proceso: 3.º Que hay lugar por delito de la competencia del juez que instruyó el proceso: 4.º Que deben practicarse nuevas diligencias. En los casos 1.º, 3.º y 4.º, el juez remitirá la causa al que la comenzó para que la continúe hasta pronunciar sentencia definitiva, ó á fin de que practique las diligencias indicadas, en el plazo que se le señale, y la devuelva para lo que hubiere lugar. En el segundo caso, el juez se avocará el conocimiento de ella, dando orden al comisario ó alcalde para que le remita al procesado con las precauciones debidas.

6. Recibida la causa por el juez constitucional con acusación del Ministerio público, se leerá ésta al inculcado delante de su defensor, para que conteste, quedándose solo, lo que á bien tenga. Se oirá en seguida al defensor, ó se agregará á los autos la defensa que presente por escrito,

ese día ó el inmediato. Si el acusado ó su defensor pidieren término de prueba, se les concederá, no excediendo en ningún caso de ocho días. Pasado el término, pronunciará el juez la sentencia á que hubiere lugar. Para dictarla apreciará las pruebas según su conciencia.

7. La parte civil ú ofendida presentará sus pruebas durante la instrucción; pero podrá rendir las que quiera y fueren admisibles, en el término pedido por el procesado. Formulará su acusación, si no lo hubiere hecho ántes, y sus alegatos en la audiencia en que debe leerse la defensa, ó al ser citada para sentencia.

8. Si la conclusión del Ministerio público hubiere sido de no haber lugar á acusación, el alcalde ó comisario dictarán su resolución, citando á las partes dentro de tres días de recibido el proceso. Esta resolución puede ser absolviendo al acusado, en el cual caso causará ejecutoria, y se archivará el expediente, si no hubiere apelación ó revocación que proceda.

9. Si el juez constitucional creyere que no procede la absolución pedida por el Ministerio público, remitirá el proceso al juez letrado para que pronuncie la sentencia debida, la cual en su caso causará ejecutoria. Si la sentencia del juez constitucional fuere condenatoria ó absolutoria, y el Ministerio público hubiere formulado acusación, se remitirán los autos al juez letrado para que la revise. Este dictará la sentencia de revisión, á los tres días de recibido el proceso en su secretaría, y lo remitirá inmediatamente al inferior para que la ejecute, si no se pidiere revocación cuando proceda; ó al superior cuando mediare apelación admisible.

CAPÍTULO II.

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES
MENORES.

ARTICULOS 362 Y 363.

1. Los jueces menores deben sujetarse en el procedimiento á las reglas del capítulo que precede; pero sus autos y sentencias no serán revisados, y ellos mismos mandarán pasar el proceso al agente respectivo para que formule sus conclusiones. Cuando éste creyere que no hay lugar á la acusación, se observará lo que para este caso está dispuesto respecto de los jueces de primera instancia en delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, según verémos más adelante.

CAPÍTULO III.

DEL PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES
DE LO CRIMINAL.

ARTICULOS DEL 364 AL 420.

1. Los jueces de lo criminal, cuando conozcan á prevención en delitos de la competencia de los jueces constitucionales, procederán en la misma forma que los jueces menores.

2. Los jueces de lo criminal, cuando conozcan de delitos que no fueren de la competencia de los constitucionales, pero cuya pena no exceda de dos años de prisión ó multa de segunda clase, observarán las prescripciones siguientes. Concluida la instrucción, el juez mandará entregar el proceso al Ministerio público, por un término que no excederá de tres días. El Ministerio público formulará su acusación sin perjuicio de promover las diligencias que estime conve-

nientes. La acusación se hará saber desde luego al procesado y á la parte civil, para que en el acto de la notificación ó al día siguiente, manifiesten si tienen diligencias que promover, ó desean ser oídos para fundar su derecho.

3. Promovidas algunas diligencias por el Ministerio público, por el acusado ó por la parte civil, el juez señalará para que se practiquen, el tiempo necesario que no podrá exceder nunca de quince días. Concluido este término, así como cuando no se promovieren diligencias, pero alguna de las partes pidiere ser oída en audiencia verbal, el juez ordenará que ésta se verifique dentro de los cinco días siguientes. En esta audiencia, que tendrá lugar aun cuando las partes no concurran, cada una expondrá lo que convenga á su derecho, por sí ó por medio de sus abogados ó defensores; teniendo el Ministerio público el derecho de modificar la acusación en vista de las nuevas diligencias que se hubieren practicado. Cuando el Ministerio público no concurra, la conclusión formulada al fin de la instrucción, se tendrá por reproducida en la audiencia. Oídas las alegaciones de las partes, el juez citará para sentencia, que pronunciará dentro de tres días.

4. Si concluida la instrucción, el representante del Ministerio público creyere que no hay lugar á la acusación, así lo manifestará, pidiendo que se archive el proceso; pero el juez, si lo estima necesario, podrá mandar que se pase por un término prudente al Procurador del ramo criminal, antes de poner en libertad al inculcado. Si el Procurador reprodujere el pedimento del Ministerio público, se archivará el expediente, y el inculcado será puesto en libertad; en caso contrario, se sustanciará el juicio, en la forma precedentemente expuesta, oyéndose en lo sucesivo en esa causa al Procurador ó al agente que él designe con ese fin.

DEL PROCEDIMIENTO

cuando la pena del delito sea mayor que dos años de prisión o multa de segunda clase.

5. Terminada la instrucción por delitos que tengan se-

ñalada una pena mayor que dos años de prisión ó multa de segunda clase, y en virtud de las conclusiones del Ministerio público, el juez mandará poner de manifiesto el proceso por tres días en la secretaría para que, si el defensor tuviere que oponer alguna de las excepciones que extinguen la acción penal, lo haga por escrito dentro de ese término, si no lo hubiere hecho durante la instrucción. Propuesta alguna de esas excepciones, el juez señalará día para la audiencia sobre ella, mandando citar á las partes. La audiencia tendrá lugar dentro de los ocho días siguientes, estando presente el acusado, si quisiere concurrir á ella, y él ó su defensor fundarán sus excepciones, la parte civil expondrá lo que conduzca á sus derechos, y el Ministerio público presentará y desarrollará sus conclusiones. Si se promoviere prueba y el juez la estimare procedente, se recibirá en esta audiencia. El juez fallará sobre las excepciones á más tardar dentro de tres días. Esta sentencia es apelable en ambos efectos. La apelación se interpondrá en el acto de la notificación del fallo, ó á más tardar dentro de los tres días siguientes, y se sustanciará en el Supremo Tribunal en los mismos términos que la primera instancia. La sentencia que se pronuncie causará ejecutoria. Si la excepción fuere declarada procedente por sentencia irrevocable, cesará todo procedimiento, mandándose archivar el proceso y poner en libertad al acusado, si por otra causa no estuviere preso. Si fuere desechada ó no se hubiere propuesto dentro de los tres días señalados á este efecto, se continuará el procedimiento en la forma siguiente.

6. El juez de lo criminal, que desde este momento es irrecusable, señalará día para el juicio, dentro de los quince siguientes. El procesado, su defensor, la parte civil y el Ministerio público, deberán presentar dentro de tercero día de hecho el emplazamiento, una lista de los testigos y peritos que quieran que se examinen durante el juicio, expresando sus nombres y apellidos y el lugar de sus habitaciones. La presentación de estas listas se hará en la secretaría del juzgado. Si el acusado estuviere preso, puede presentar la lista al alcaide de la cárcel, quien tiene obliga-

ción de darle recibo de ella, copiándola en éste é indicando el día y hora en que la recibió, y deberá remitir la lista original á la secretaría del juzgado sin dilación alguna. Si el procesado no supiere ó no pudiese escribir, formará la lista de los testigos el alcaide, bajo el dictado del mismo procesado, y la remitirá á la secretaría del juez.

7. La lista de los testigos y la instrucción estarán á la vista del Ministerio público, de la parte civil, del procesado ó de su defensor, pudiendo cualquiera de ellos sacar las copias que le parezcan. Si el acusado estuviere preso, y hubiere manifestado que quiere defenderse por sí mismo, le será entregada copia suscrita por el secretario, de las listas del Ministerio público y de la parte civil. De la presentación de las listas y de haberse entregado las copias al procesado, se pondrá constancia en la causa, á la que quedarán agregadas las listas originales.

8. El Ministerio público, la parte civil y el procesado, quedan en libertad para presentar por sí mismos sus testigos, el día de la audiencia, ó para pedir al tribunal que se les cite por la secretaría. También podrán adicionar sus listas en vista de las que las otras partes hubieren presentado, siempre que lo hagan por lo menos tres días antes de que se verifique el juicio. Los testigos y los peritos serán citados para éste, en la misma forma que para la instrucción.

9. Cuando resultare ausente alguno de los testigos ó peritos citados conforme á las listas producidas por las partes, el juez, después de oír al Ministerio público, al acusado ó su defensor y á la parte civil, decidirá si debe ó no procederse al juicio. Lo mismo se practicará siempre que el testigo no haya sido citado, á pesar de haber sido incluido en las listas presentadas por las partes. Si alguna de éstas declarase esencial la presencia de algún testigo que hubiere incluido en su lista, y que su declaración no pueda suplirse leyendo la que hubiere dado durante la instrucción, el juez mandará buscar al testigo, y si fuere necesario, lo hará conducir á la audiencia. Si ni aun por este medio se consiguiera la comparecencia del testigo, se diferirá el juicio siempre que, en vista de las explicaciones que hiciere

la parte promovente, el juez estimare indispensable la presencia de aquel.

10. Sólo por una vez se podrá diferir la celebración del juicio por la falta de asistencia de un testigo determinado: por el cual motivo, si las partes ó el juez temieren fundadamente que el testigo falte á la segunda citación, podrá decretarse que se le examine ántes del día nuevamente señalado para el juicio, en el cual se leerá la declaración que hubiere producido. Si por la falta de comparecencia de un testigo ó de un perito citados, fuere necesario diferir el juicio para otra audiencia, todos los gastos de citaciones, de viajes de los testigos ó peritos y cualquier otro que se origine por la falta de comparecencia, serán á cargo del testigo ó del perito que haya faltado: sin perjuicio de que en todo caso, ya se difiera ó no la audiencia, se les castigue con las penas que establecen los artículos 904 y 905 del Código penal (1), las cuales serán aplicadas de plano por el juez, oyendo al Ministerio público. El testigo ó perito que fueren castigados de la manera expresada, podrán pedir revocación, justificando en una audiencia, en la que serán oídos el interesado y el Ministerio público, que tuvieron legítimo impedimento para presentarse. Esto sin embargo, no impide la facultad que tendrá el juez, en caso de que lo estime necesario, para ordenar que los testigos ó peritos sean conducidos por la fuerza pública á la audiencia, á fin de ser examinados. Si antes de cerrarse los debates se presentaren el testigo ó el perito que hayan faltado, se les admitirán verbalmente las excusas que alegaren para disculpar su falta, y se confirmarán ó levantarán las penas que se les hayan impuesto.

11. Por regla general, no podrá darse lectura á las declaraciones de los testigos que formen parte de la instrucción, si no están comprendidos en las listas que deben depositarse y comunicarse antes del juicio. Se exceptúan de esta regla: 1.º Los testimonios que tengan por objeto

(1) Multa de diez á cien pesos y un serio apercibimiento por la primera vez; si repite la falta se duplicará la multa, y si insistiere en ella, se le aumentarán diez pesos por cada desobediencia.

comprobar el cuerpo del delito: 2.º Aquellos en cuya lectura estén conformes el Ministerio público y el acusado: 3.º Los que el juez estimare convenientes.

12. Si alguno de los testigos examinados durante la instrucción, hubiere muerto, estuviere ausente y se ignorase su residencia ó hubiere perdido la capacidad para ser testigo, se leerá su declaración, siempre que haya sido incluido en la lista de alguna de las partes.

13. Los testigos, antes de ser examinados, harán la protesta de decir *toda la verdad, y nada más que la verdad*. Los peritos harán la protesta *de proceder bien, y fielmente en su encargo, y de no tener otra mira que la de dar á conocer á los jueces sólo la verdad y toda la verdad*. Estas protestas se harán estando las partes y el perito ó testigo de pié, y el juez amonestará al testigo ó perito sobre la importancia del acto y sobre la gravedad de las penas á que se exponen, en caso de falso testimonio, por no decir la verdad ó por ocultarla de alguna manera. Los testigos, antes de su examen, deberán estar reunidos en un cuarto separado de la audiencia, de manera que no puedan ver ni oír lo que pase en ella, y serán examinados separadamente, uno después de otro, de modo que los posteriores no estén presentes al examen de los anteriores. El Ministerio público tomará las debidas precauciones para que los testigos, una vez que estén reunidos, no puedan conferenciar con los interesados antes de su examen.

14. El juez preguntará á cada testigo su nombre y apellido, su patria, estado, profesión y domicilio: si conoció al acusado antes del hecho de que se le acusa, y si tiene alguno de los impedimentos para declarar, de que habla el Código. En seguida se preguntará á las partes si tienen tacha que poner al testigo; y respondiendo alguna afirmativamente, se le concederá la palabra para exponer sus pruebas y fundamentos, después de lo cual, las otras partes, y aun el testigo mismo, tendrán derecho de que se les oiga. Si de las alegaciones y pruebas de las partes resultare que la ley prohíbe examinar al testigo, así lo resolverá el juez sin ulterior recurso; pero quedando en el

acta constancia de la resolución. En caso contrario y aún cuando en el testigo no concurren todos los requisitos legales, se procederá á examinarlo sobre los hechos relativos al proceso. El acusado, el Ministerio público y la parte civil podrán oponerse al examen del testigo que no haya sido indicado ó claramente designado en las listas respectivas.

15. Los testigos declararán verbalmente, siéndoles sólo permitido consultar algunas notas ó memorias, atendidas la calidad del testimonio que presten y la naturaleza de la causa. Los testigos no podrán ser interrumpidos. Después del interrogatorio que les haga el juez; el acusado, su defensor y la parte civil, podrán hacerles las preguntas que juzguen conducentes para su defensa ó para sostener su derecho. Estas preguntas se harán por medio del juez, ó directamente con permiso de éste, quien en todo caso prohibirá al testigo que las responda, si las califica de inconducentes. El Ministerio público podrá preguntar directamente, pidiendo la palabra al juez.

16. Los testigos no podrán interrogarse el uno al otro; pero serán careados cuando sus declaraciones resulten discordantes sobre circunstancias que el juez crea esenciales. Todo testigo después de su declaración, permanecerá en la sala de la audiencia hasta que concluya el debate, sin poder ausentarse sino con autorización del juez y consentimiento de las partes. Al que se ausentare sin permiso, se le aplicarán las penas del artículo 905 del Código penal (1), de la manera que expresan los artículos 384 y 385 de éste Código (2). El juez podrá, á pedimento de una de las partes y aun de oficio, ordenar que los testigos examinados ó algunos de ellos que se designen, se retiren á otro lugar para ser de nuevo interrogados, ya separadamente, ó ya en presencia unos de otros.

17. Cuando el acusado, los testigos, ó alguno de ellos no hablen el idioma español, el juez nombrará de oficio un intérprete mayor de edad, y le hará protestar que tradu-

(1) Queda dicho en otra nota cuales son estas penas.

(2) Pueden pedir revocación de la pena, según también se ha expuesto.

cirá fielmente las preguntas y contestaciones que haya de trasmitir. Lo mismo se observará cuando haya que traducir algún documento. Si no pudiere ser habido un intérprete mayor de edad, podrá ser nombrado el mayor de catorce años. El acusado, el Ministerio público y la parte civil podrán recusar al intérprete motivando la recusación y el juez fallará el incidente de plano y sin recurso. Los testigos no podrán ser intérpretes, ni aun con consentimiento de las partes.

18. Si el acusado ó alguno de los testigos fueren sordomudos, ó simplemente sordos ó mudos, el juez nombrará de oficio para intérprete, á persona que pueda comprenderlos, aunque no sea mayor de edad, siempre que sea mayor de catorce años. Si el sordo-mudo, ó simplemente mudo ó sordo, sabe leer y escribir, se le escribirán las preguntas y observaciones que se le hagan, y se le dejará escribir sus respuestas. El secretario dará lectura á éstas y á las preguntas.

19. Los peritos serán examinados en la misma forma que los testigos. Sin embargo, cuando la naturaleza de las cuestiones lo aconseje, el juez podrá ordenar que los peritos asistan al debate ó á parte de él, y aun que declaren en presencia unos de otros.

20. Si del examen de un testigo ó en el curso de los debates hubiere motivos suficientes para sospechar que declara falsamente, ó que en su declaración oculta la verdad sobre un hecho del cual conste por el debate que tuvo conocimiento, el juez ordenará que se le lean los artículos 733 á 738 inclusive del Código penal (1) y le preguntará si insiste en su declaración. En caso de afirmativa, el testigo será detenido desde luego, y se mandará extender una acta de sus preguntas y respuestas, en la que se harán constar los motivos que le hayan hecho sospechoso de falso testimonio, la cual servirá al juez competente para formar la instrucción que corresponda. Esta no tendrá lugar si el testigo se retractare espontáneamente ántes

(1) Definen estos artículos el delito de falso testimonio y señalan sus penas.